

REPORTE DE ACTIVIDADES

2023-
2024



Tabla de Contenidos

| | |
|--------------------------------|----|
| Introducción | 3 |
| Análisis de Coyuntura Regional | 5 |
| Principales Actividades | 7 |
| COECOCEIBA - AT Costa Rica | 8 |
| Haiti Survie - AT Haití | 12 |
| CESTA - AT El Salvador | 15 |
| Amigas da Terra Brasil | 19 |



Introducción



El presente boletín tiene como propósito dar a conocer el esfuerzo que grupos de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe junto con Amigos de la Tierra de Dinamarca han realizado en el último año.

De esta manera, se presentan algunos de los principales logros o resultados que han tenido como denominador común estrechar y fortalecer los lazos de solidaridad internacionalista entre los pueblos. Particularmente, porque el aumento de la criminalización, asesinatos, estigmatización, encarcelamiento, y ataques a las/os defensoras/es de los territorios y de los derechos de los pueblos, ubican a la región de Latinoamérica y el Caribe, como una de las más peligrosas para las resistencias y reivindicaciones por la justicia ambiental.

Por consiguiente, las acciones se dirigieron a nivel de la formación y de la

incidencia política, enfatizando en la lucha contra el neoliberalismo y el poder que ejercen las grandes empresas multinacionales y las élites económicas nacionales, en la economía y la naturaleza.

Al mismo tiempo, el quehacer de los grupos de ATALC promueve y desarrolla una agenda política de cambio de sistema, que implica la organización y construcción de movimiento y poder popular, reafirmando la defensa de los derechos de los pueblos.

Por tanto, iniciamos el presente boletín con un breve análisis de contexto de la región, luego enumeramos aspectos, temas y contenidos principales de los cuatro grupos de ATALC (COECOCEIBA AT Costa Rica, Amigas da Terra Brasil, Hati Survie AT Haití y CESTA AT El Salvador), en los cuales han estado ocupados en el último año.

Análisis de Coyuntura Regional

América Latina "juega un papel irremplazable en la seguridad alimentaria global", asegura la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, y destaca que la región "produce alimentos para satisfacer las necesidades calóricas de alrededor de 1.300 millones de personas, es decir, para uno de cada seis habitantes del planeta". Sin embargo, a pesar que la producción alcanzaría para alimentar a toda su población, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé que la región atravesará una de las crisis más agudas de su historia en materia de inseguridad alimentaria, como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Según la FAO, con el conflicto "está aumentando el precio de insumos claves para la producción de alimentos, como los combustibles y fertilizantes". Argentina y Brasil, por ejemplo, dependen fuertemente de fertilizantes baratos provenientes de Rusia y Bielorrusia. Además, el mayor costo y la menor disponibilidad de los alimentos tienen un impacto negativo en varios países importadores de la región, como los del Caribe. El principal obstáculo para erradicar el hambre en la región es el modelo de producción que prioriza el "agronegocio de gran escala para la exportación", como los monocultivos de soja, maíz y trigo, que depende de los hidrocarburos y tiene un fuerte impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Otra grave dificultad a la que se enfrentan millones de pobladores en América Latina y el





Caribe, son las consecuencias de eventos climáticos extremos que amenazan vidas, el sustento y los hospitales de los que dependen, según un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), revela que un estimado de 41 millones de personas - o el 6% de la población en la región - que viven en áreas costeras están expuestas a tormentas e inundaciones que ponen en riesgo la vida. El análisis también muestra que 1,448 hospitales vitales para la salud materna y la planificación familiar se encuentran en áreas costeras de baja elevación, más propensas a los desastres naturales:

- En Aruba y las Islas Caimán, Surinam, Bahamas y Guyana, más del 80% de los hospitales están en áreas costeras de baja elevación.
- En otras zonas del Caribe y América Latina, los países con el mayor número de hospitales en áreas costeras de baja elevación son Brasil con 519 (7.2%) instalaciones, México con 159 (5.4%) instalaciones, Haití con 133 (10%) instalaciones y Ecuador con 130 (11.9%) instalaciones.¹

De igual forma, cada vez más la región afronta olas de calor y altas temperaturas, por ejemplo, en México se registraron 48 muertes y 956 lesiones relacionadas con el calor de marzo a mayo del 2024, según cifras de la Secretaría de Salud, un tercio del país ha registrado máximas de 45 grados centígrados.

Según el Ministerio de Sanidad, el golpe de calor es el problema sanitario más común y afecta al 60% de los pacientes y causan más del 80% de las muertes.

1. [UNFPA México](#)

México atravesó la tercera de las cinco olas de calor previstas a lo largo de este año, como consecuencia del fenómeno natural "El Niño"². Con precipitaciones por debajo de la media, los lagos y embalses se están secando y las reservas de agua se agotan. Las autoridades han tenido que transportar agua en camiones, desde hospitales hasta equipos de bomberos. Los bajos niveles de las presas hidroeléctricas han provocado apagones en algunas partes del país.

En los países del sur también han enfrentado problemas climatológicos, lo más reciente ocurrió en Brasil, que se enfrentó a una inundación considerada como la mayor tragedia socioambiental de Río Grande del Sur. De los 497 municipios del Estado, 447 se vieron afectados por las inundaciones, dejando 157 personas fallecidas, y 657,800 personas sin hogar. La catástrofe afectó a 2.3 millones de personas en todo el Estado, muchas de las cuales se consideran ahora refugiados climáticos.

Porto Alegre, la capital, se enfrentó a una situación crítica, con más del 70% de su población de 2 millones de habitantes privada de agua potable y electricidad, así como el cierre del aeropuerto y de varias carreteras, ocasionando el aislamiento de municipios enteros, comunidades rurales y pueblos tradicionales.

A pesar de que el presidente Lula da Silva y el gobierno central han intentado dar una respuesta más integral a la emergencia, los gobiernos municipales tienen una visión diferente y omitieron declarar estado de calamidad.

Esta tragedia repercutió a la vez en Uruguay, en ocho departamentos del país. Más de 3,300 personas tuvieron que abandonar sus hogares, debido a las inundaciones por las fuertes lluvias. La mayoría de los damnificados se ubicaron en el litoral norte sobre el río Uruguay, que es limítrofe con Argentina.

[2. CNN en Español](#)



Los Angeles Times

El caudal del Río Uruguay que nace en la cordillera brasileña Sierra Geral, creció por las fuertes lluvias en el sur de Brasil. El impacto de las inundaciones afectará en la producción agropecuaria, en particular en la cosecha de soja, arroz, maíz, caña de azúcar y cítricos, y en la siembra de trigo, cebada y colza. Además, de problemas derivados de la pérdida de animales, falta de forraje y dificultades para el traslado de ganado.

En la escena política y económica hay que referirse el dominio del neoliberalismo y su consolidación, así como una disputa estratégica en el control geopolítico sobre los recursos naturales para el caso de Ecuador, particularmente; el intenso conflicto de poder entre la derecha y la izquierda en Venezuela; los bloqueos y negativas hacia la integración de países como Perú y Paraguay, son realidades que siguen deteniendo cualquier posibilidad de adoptar una perspectiva integradora en la región.

Por otra parte, en Brasil, Honduras, Colombia y Guatemala, se observa una desestabilización del modelo de la democracia; donde la victoria de los gobiernos progresistas se ha limitado a las elecciones, pero no trasciende en el poder; dado que la derecha controla el poder institucional, las fuerzas policiales, militares y los órganos de justicia. Por tanto, nos enfrentamos a una agenda internacional que busca limpiar la imagen de la operación de las empresas transnacionales.

A pesar de estas realidades en América Latina y el Caribe, hay articulaciones fuertes, como la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, en Foz da Iguazú, con la perspectiva de integrar a los pueblos y que los movimientos sociales den contenido a estos acuerdos. Es crucial que estos acuerdos alcancen los espacios donde se toman decisiones políticas y se conviertan en políticas públicas, teniendo un impacto tangible en el poder.



Principales Actividades



COECOCEIBA - AT Costa Rica

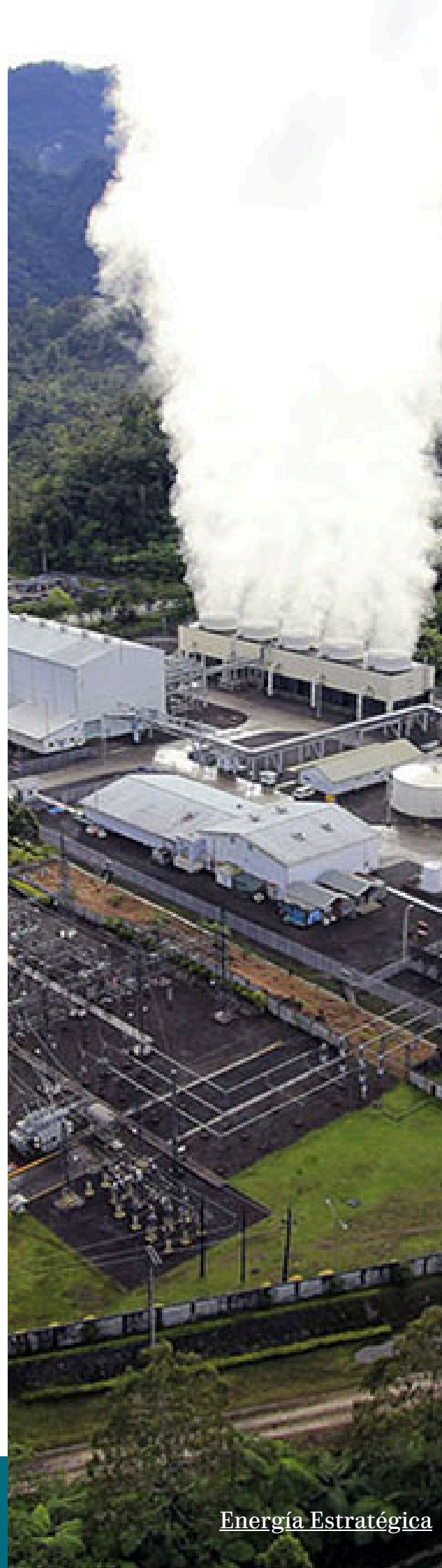
Sistema Eléctrico en Costa Rica: Una Mirada desde la Justicia Climática y Ambiental

El control de la generación y la distribución de la energía en Costa Rica está en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad estatal que goza de autonomía política y financiera a nivel constitucional.

Amenazas de Privatización

En 1990 se aprueba la Ley 7.200 titulada “Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela” y la ley n.º 7.508 conocida como el Capítulo II de la Ley 7.200 del año 1995, ambas “abrieron” el mercado eléctrico, obligando a que el ICE compre a las empresas privadas hasta un 30% de la capacidad instalada a nivel nacional. Este modelo de “comprador único” dispuesto por esta Ley 7.200 hace que el ICE se vea obligado a comprar energía, aunque no la necesite.

Actualmente, hay tres proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa y forman parte de un combo que se viene trabajando en el país para desaparecer al ICE como institución estatal, de liquidar el modelo eléctrico nacional, y apuntar hacia un modelo energético para poner en igualdad de condiciones a los generadores privados y al ICE.





La ley, permite la apertura del mercado nacional y regional a generadores privados (actualmente no es posible) y desmantelaría el modelo público y solidario que tenemos actualmente.

Ante esta situación se creó una alianza llamada “Coalición por la defensa del modelo eléctrico solidario para Costa Rica”, con el lema: “Electricidad justa y solidaria para Costa Rica”, conformada por diputados/as, sindicatos del sector eléctrico público y organizaciones ambientales para oponernos a la agenda de privatización del sector eléctrico. Hemos participado y organizados foros, reuniones, giras en diversas zonas y comunidades del país y realizado labores de incidencia en la Asamblea Legislativa, junto a otras organizaciones ecologistas y sindicatos.

Las Propuestas

Se requiere transformar el sistema energético actual que ha contribuido a la crisis climática que se enfrenta. No obstante, las problemáticas del actual sistema energético no radican solo en el tipo de energía y sus tecnologías, sino también en sus lógicas y dinámicas.

Para una transición energética justa se necesita: Un sistema energético que sea público, impulsado por los pueblos, 100% renovable, y que garantice el acceso a energía suficiente para todas y todos y los derechos de las y los trabajadores y los pueblos. Las decisiones acerca de la producción y el consumo de energía tienen que ser democráticas, participativas, abiertas y someterse a rendición de cuentas.



Los movimientos sociales consideran importantes y reclaman la incorporación de los siguientes elementos en la discusión:

- Energía como un derecho
- Energía como un bien común y no una mercancía
- Suficiencia energética
- Tecnologías localmente apropiadas y de bajo impacto
- Propiedad y control público de empresas de energía
- Garantizar diálogo social y participación en procesos de decisión de la política energética

Soberanía Alimentaria

En Costa Rica actualmente sembramos el 9.71% del frijol que consumimos, el 1.47% del maíz y el 37.8% del arroz. Costa Rica se encuentra entre los países más dependientes de la importación de granos básicos en el mundo y es el más dependiente entre los países de Latinoamérica de similar consumo.

En Costa Rica hay un altísimo uso de agroquímicos. 20 de los 22 plaguicidas más peligrosos del mundo se utilizan en nuestro país. El promedio de uso de plaguicidas agrícolas es de 34 kilogramos por hectárea.



Desde 1990 el sector agropecuario sufre abandono total por parte de autoridades del Estado, al reducir drásticamente asesoría y capacitación. Esto favorece que empresas comercializadoras de agroquímicos asuman este rol, donde privan sus intereses económicos sobre la seguridad fitosanitaria y ambiental

Las políticas agrarias de las últimas décadas han favorecido un modelo agroexportador que ha provocado la pérdida de soberanía alimentaria y de biodiversidad. Por lo que el movimiento social exige los siguientes elementos:

- La alimentación como derecho humano y no como mercancía;
- Reconoce y promueve el papel central de las mujeres en la producción de alimentos y como sujetos políticos
- El derecho de los pueblos a participar en la toma de decisiones
- El derecho de los pueblos, la tierra, los territorios, las semillas y la biodiversidad
- Promueve la agroecología
- Lucha contra el modelo del agronegocio y las políticas neoliberales de comercio e inversiones
- El derecho de las/los trabajadoras y productores/as a pequeña escala a gozar de condiciones de vida y trabajo dignas y a recibir remuneraciones justas
- El derecho de la clase trabajadoras a acceder a alimentos saludables y culturalmente apropiados en cantidades suficientes y a precios justos

El presidente de la República de Costa Rica, además, de ser populista y de derecha, ataca al movimiento ecologista, y lo sitúa como un enemigo ante las comunidades. Este ejercicio es muy típico de su quehacer: deslegitimar a través de ataques al movimiento social y manipular la opinión pública para que no existan voces distintas a la oficial. Esta situación es peligrosa y representa un riesgo mayor a futuro, por tanto junto a otras organizaciones y movimientos, estamos desarrollando estrategias para evitar que se promueva más odio y conflicto con la población.





France 24

Haiti Survie - AT HAITÍ

Puerto Príncipe en el Infierno de las Pandillas

Desde hace aproximadamente tres décadas, la República de Haití enfrenta una serie de crisis multidimensionales, que se ha agudizado desde el asesinato del presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Según el último informe, el 2023 fue presentado como el año más mortífero de los últimos 10 años.

En febrero de 2024, dos de las coaliciones de bandas armadas se agruparon dentro de una misma estructura de “viv ansanm” y comenzaron a cometer sus actos de barbarie (robos, saqueos, secuestros, asesinatos, violaciones) contra la población civil.

Se han dado secuestros, entre ellos el de un sacerdote católico, e incluso invadieron la congregación de las Hermanas de San José de Cluny y secuestraron a tres monjas. Varias personas fueron asesinadas, entre ellos seis policías asignados a la subcomisaría de Bon Repos, a la cual los delincuentes prendieron fuego.

Además, tomaron las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la saquearon y atacaron físicamente a sus estudiantes; uno de ellos resultó herido de bala. Las instituciones públicas tampoco se salvaron, las instalaciones de la Dirección de Vehículos, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del Interior, nueve comisarías y subcomisarías fueron saqueadas y/o quemadas.³

Lo más inaudito es que "No menos de 17 hospitales fueron atacados, destrozados o quemados por las bandas armadas";⁴ entre estos el hospital más grande del país, el de la Universidad Estatal de Haití (HUEH). Situado en el corazón de Puerto Príncipe,

[3. Vant Bèf Info \(VBI\)](#)

[4. Vant Bèf Info \(VBI\)](#)

este centro hospitalario atiende a millones de personas que, en la mayoría de los casos, no pueden permitirse los servicios de hospitales privados.

También fueron atacadas dos cárceles estatales: la prisión civil de Puerto Príncipe y la de Croix-des-Bouquets, situada al este de la capital. No menos de 4,000 prisioneros, entre ellos pandilleros condenados a cadena perpetua, huyeron.⁵

Uno de los sectores más afectados es la población civil de los barrios obreros, estos tienen que desplazarse de una zona a otra. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, contabilizó que “15,000 personas debieron abandonar sus hogares, la mayoría de estas ya estaban desplazadas, y han vuelto a ser desplazadas en los últimos días. La mayoría encontró refugio en sitios existentes, el resto se instaló en sitios nuevos creados espontáneamente...”.⁶ Por su parte la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dijo que, hasta principios de abril de 2024, el número de personas desplazadas en zonas ocupadas por grupos armados ha llegado a 53,000.⁷

Este contexto igualmente ha estado marcado por la designación e instalación de un Consejo Presidencial de Transición de 9 miembros. y la instalación de un nuevo gobierno y también la llegada del primer contingente keniano de la fuerza multinacional para apoyar a la policía nacional en la lucha contra el crimen organizado. Mientras tanto, los residentes de Puerto Príncipe y sus alrededores siguen siendo los más afectados por esta violencia impuesta por los grupos armados.

[5. Le Placentin](#)

[6. UN.ORG](#)

[7. Le Parisien](#)





Formación Política en Derechos Humanos

Los Derechos Humanos siguen siendo un tema que requiere debate y reflexión en todo el mundo. La situación en Haití es crítica, y no difiere de la de otros países de la región. La gran mayoría de la población ha sido víctima de numerosas decisiones tomadas por el Estado, que solamente han beneficiado a un pequeño sector que representa a la clase adinerada de este país.

Por ello, sensibilizar a la población sobre algunos aspectos clave de los derechos humanos, ha sido fundamental en este proceso. Temas como el papel del Estado, la violación a los derechos humanos, y alternativas ante la vulneración de estos, entre otros; han sido dirigidos a miembros/as de las comunidades de primera línea y organizaciones aliadas.

Las y los participantes pusieron de relieve todos los abusos que sufre el sistema vigente y lo denunciaron; concluyendo que la mayoría de sus derechos nunca habían sido respetados por el Estado. Como resultado de los talleres, dos de los departamentos (Noreste y Sur) formarán una única escuela, en la que podrán trabajar juntos para garantizar el respeto a los derechos humanos y denunciar cualquier violación. Además, se formará una plataforma para conectar a todos y todas, para un mejor progreso.

Otra de las conclusiones fue la necesidad de organizarse para elegir mejor en las elecciones y presionar al Estado. Incluso afirmaron que no merecen un Estado que no se preocupa por sus necesidades básicas y no toma en cuenta sus reivindicaciones. Al mismo tiempo, las sesiones de formación fueron una oportunidad para que los participantes expresaran sus inquietudes y descontentos hacia el Estado.

Es necesario continuar la formación política con los grupos, especialmente en un contexto de transición política, para que los participantes puedan involucrarse en la gestión de sus comunidades y denunciar violaciones de cualquier naturaleza que les afecte tanto a nivel individual como colectivo. Por tanto, aún hay muchos esfuerzos por delante.

CESTA - AT El Salvador

El año 2024 comenzó con lo que ya se pronosticaba: una reelección ilegal e inconstitucional para la presidencia de la república, la Constitución de este país prohíbe la reelección presidencial para evitar la concentración de poder en una persona. No obstante, magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia impuesta por Nayib Bukele, hicieron una reinterpretación de la Constitución para avalar su reelección.

El proceso para elegir al presidente y a la Asamblea Legislativa, tuvo tantas anomalías que varios políticos e instituciones académicas dijeron que no habían visto tantas irregularidades desde 1972, cuando el candidato Maximiliano Hernández Martínez, ganó unas elecciones consideradas históricamente como fraude electoral.

Otro órgano del estado que sigue cooptado por el presidente y el partido oficialista es la Asamblea Legislativa, ya que cuenta con 54 de los 60 diputados, a los que se unen también dos diputados del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y un representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Esto permite aprobar cualquier ley o decreto de forma unánime, sin revisar, discutir y analizar dichas iniciativas.

Estado de Excepción

El régimen de excepción viene desde marzo del 2022, y la medida suspende el derecho de asociación y permite a las autoridades intervenir correspondencia y celulares de las personas a las que se considere sospechosas. Además, el plazo de detención administrativa — sin pasar a disposición judicial — se extendió de 72 horas a 15 días. Los detenidos pierden el derecho a ser debidamente informados de los motivos de su aprehensión y a acceder a un abogado para su defensa.⁸

El Servicio Social Pasionista denunció que las organizaciones de derechos humanos

[8. Voz de América](#)

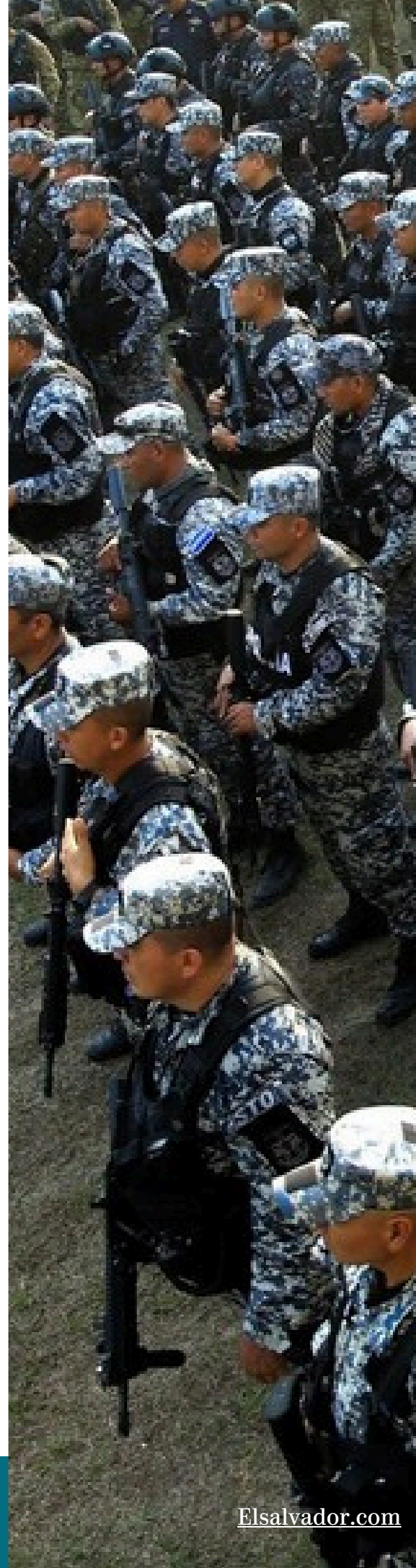
salvadoreñas acumulan más de 6,300 denuncias de víctimas a violaciones a derechos humanos solo ocurridas en el marco del régimen de excepción y más de 260 personas muertas.

Además, Socorro Jurídico Humanitario detalló en junio que 60 personas murieron bajo custodia del Estado desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 16 de mayo de este 2024. La organización defensora de derechos humanos denunció que en el 40 % de las muertes que registran hay indicios de violencia o tortura, en un 31 % hubo negligencia por falta de atención médica, en el 23 % la causa del deceso es desconocido y un 6% corresponde a personas con enfermedades terminales.⁹

El Gobierno salvadoreño ha admitido que entre las capturas del régimen de excepción hay “un margen de error” y ha afirmado que “en toda guerra hay daños colaterales”. Solo como una muestra de esto, Génesis tenía nueve meses de haber nacido cuando la Policía le arrebató a su madre en un operativo del régimen de excepción. Marbely, su madre fue capturada en agosto de 2022, sin antecedentes, sin una investigación y sin una tan sola evidencia en su contra. Como daño colateral, Génesis se quedó sin su madre y sin alimento. Mientras tanto, Marbely sigue en prisión, a pesar de que un tribunal ordenó su liberación el 19 de mayo de 2023, y tampoco sabe que su hija falleció.¹⁰

[9. Elsalvador.com](#)

[10. Gato Encerrado](#)





Defensores/as de DDHH Detenidos en Régimen de Excepción

Las organizaciones sociales señalan que ya son 34 los defensores de derechos humanos que se mantienen encarcelados en el marco del régimen de excepción. En este grupo destacan comunicadores de medios, defensores del medio ambiente, del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y sindicalistas. Las diferentes organizaciones señalan que se han vulnerado sus derechos y la captura es la agresión más grave a la que se han enfrentado, pues algunos de ellos tienen más de un año en prisión.¹¹

En El Salvador hay una situación crítica que desfavorece a los grupos sociales en el tema de derechos humanos, y amerita que la sociedad tome conciencia y que defienda los logros y avances que se había tenido en materia de democracia, en materia de la participación ciudadana, la institucionalidad del país, el estado de derecho, la separación de poderes y sobre todo los derechos humanos, todo eso está quebrantado y cada vez la situación es más difícil.

Megaproyectos: Desalojos y Expropiación de Tierras

Con inversión en grandes proyectos de infraestructura, el gobierno salvadoreño sigue apostando a megaproyectos estratégicos, planificando y ejecutando proyectos como el Tren del Pacífico, un monorriel para el Área Metropolitana de San Salvador, la modernización y ampliación del Puerto de Acajutla y el Aeropuerto del Pacífico, solo por mencionar algunos.

Con la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, la entidad encargada CEPA, admitió que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazó dicho proyecto por los impactos que este ocasiona, porque el megaproyecto

[11. La Prensa Gráfica](#)

se encuentra en una porción del Área Natural Protegida Manglar El Tamarindo. La construcción afectará el drenaje de cuatro ríos que alimentan los esteros Los Limones o Bananera y El Tamarindo. También, el sitio es un “corredor biológico primario”, donde se encuentran especies importantes como la Lora Nuca Amarilla, detalla la resolución.

Líderes Comunitarios Presos por Oponerse al Aeropuerto del Pacífico

Tres defensores de derechos humanos han sido capturados bajo el régimen de excepción y enfrentan un proceso sin garantías legales. Los vecinos denuncian que estas detenciones se deben a que los defensores se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una promesa de campaña del gobierno de Nayib Bukele que se ejecuta entre irregularidades y a costa de dejar sin viviendas y tierras a los casi 700 campesinos de Flor de Mangle y Condadillo.

Igualmente, la segunda etapa del programa Surf City está generando impacto en la comunidad pesquera de El Icacal, en La Unión. Los habitantes denuncian la destrucción del manglar y el despojo de tierras estatales por parte de Desarrollo Turísticos del Pacífico. A la par el gobierno presiona a las comunidades para que desalojen los terrenos donde se desarrollarán proyectos como la ampliación de la carretera CA2, desde playa El Obispo hasta playa El Zonte; Bitcoin Beach y Parque de Playa Mizata, en La Libertad, entre otros.¹²

Ante dicha situación de amenaza por parte de la empresa privada y el Estado salvadoreño, para la construcción de megaproyectos, se creó en abril del 2024, la Mesa Nacional contra el Desalojo y Expropiación de Tierras de los Pueblos, formada por comunidades afectadas, y organizaciones de la sociedad civil que respaldan y acompañan a los territorios, en sus acciones de lucha y resistencia.

[12. MalaYerba](#)



Amigas da Terra Brasil

En los últimos seis meses hemos sido testigos/as de fenómenos meteorológicos extremos en Brasil: sequías en la Amazonia e inundaciones en el sur del país, donde está ubicada la sede de la organización Amigas de la Tierra Brasil, como consecuencias inmediatas del cambio climático y de los impactos generados por las corporaciones en los últimos siglos.

En mayo hubo una serie de ciclones que crearon un escenario de destrucción ambiental y climática, debido a fuertes lluvias asociadas a una frecuencia e intensidad nunca antes vista de ciclones extratropicales, lo que ha causado pérdidas de vidas humanas, viviendas y medios de producción y el aislamiento de familias en el campo y las ciudades, y principalmente ha agravado la situación de vulnerabilidad social de muchas personas. Y aunque se trata de la cuarta y peor tragedia climática que Rio Grande do Sul ha enfrentado en menos de dos años, todavía hay gobiernos municipales y parlamentarios negacionistas que ignoran los efectos del cambio climático.

Investigaciones científicas muestran que la deforestación, incluso en la Amazonía, tiene un impacto directo en el aumento de las temperaturas y, en consecuencia, en el aumento de la incidencia de lluvias y eventos





extremos en Brasil y en el planeta. También corporaciones como Vale S.A. y Braskem, dos empresas mineras que juntas son responsables de los mayores crímenes socio-ambientales del país. La impunidad de esas corporaciones y de los Estados capturados por el agronegocio y la minería les permite seguir causando daños al medio ambiente y también a comunidades ya vulnerables debido a las desigualdades sociales y a la falta de garantía de derechos e inversiones en infraestructura.

La emergencia climática es una realidad impuesta a las desigualdades estructurales y sistémicas: las injusticias ambientales recaen sobre los menos responsables históricamente del problema, que son los más indefensos para afrontar las consecuencias. Las pérdidas materiales son miles de millones. Reconstruir ciudades, economías y vidas llevará mucho tiempo. Y por más difícil que sea, todavía nos queda mucha vida por la que luchar.

Incidencia

Fortalecimiento de la Integración Regional

La incidencia política es un área estratégica en los diversos grupos de ATALC, que requiere perseverancia y dedicación para desarrollar procesos y construir o fortalecer alianzas y coordinaciones con organizaciones y movimientos sociales y políticos. Dichas tareas han cobrado buenos resultados en el trabajo de Amigas de la Tierra Brasil, a nivel local, nacional, regional e internacional, contribuyendo a consolidar la integración regional como una forma de afrontar las crisis estructurales y promover un desarrollo económico y social sostenible.

La integración debe priorizar la superación de las desigualdades y la protección de los derechos colectivos, teniendo en cuenta la voz y la participación activa de los distintos sectores sociales.

ATALC y la Jornada Continental en Brasilia

En mayo del 2023, se desarrolló en Brasilia, un encuentro político coordinado por AT Brasil, ATALC y la Jornada Continental, en la que participaron organizaciones y movimientos sociales de Honduras, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil; así como sindicatos de la región: la CSA (Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas) y la CUT de Brasil.

También estuvieron presentes Juma Xipaia, de la Secretaría de Articulación y Promoción de los Derechos Indígenas del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, y parlamentarias del congreso, en el seminario denominado “Fortaleciendo la democracia con poder popular y contra el neoliberalismo en América Latina y el Caribe”. Los temas fueron variados y concretos: coyuntura regional desde una perspectiva ambiental y del feminismo popular, impunidad transnacional y defensa de los derechos de los pueblos, impactos de los Tratados de Libre Comercio y las agendas neoliberales, integración y construcción de soberanía popular.

Jornada Latino-Americana y Caribeña de Integración de los Pueblos

En febrero de 2024, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, Amigas da Terra Brasil y el Comité de la Juventud Trabajadora de la Confederación Sindical de las Américas CSA-CITA, organizaron una conferencia y un seminario que tuvieron como eje central el cruce entre trabajo, juventud, feminismo y justicia ambiental. Conference.

Participaron 29 personas de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), las actividades se llevaron a cabo en el campus de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA, ubicada en la triple frontera entre Paraguay,



Argentina y Brasil, previo a la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos.

Posterior al seminario con la CSA-CITA la delegación de ATALC se incorporó a las actividades de la Jornada Latinoamericana de integración de los pueblos; fueron dos días de intensos debates e intercambios entre diversas organizaciones y articulaciones de los movimientos populares de la región: campesinos, sindicales, estudiantiles, feministas, Pueblos Indígenas y afrodescendientes, juventudes, defensores de derechos humanos, ambientalistas, intelectuales, representantes políticos y artistas.

Cada día tuvo un objetivo, el primero fue de diagnóstico y el segundo de propuestas. Los intercambios se realizaron en paneles con ejes temáticos: democracia, soberanía e integración; bienes comunes de los pueblos: agua, tierra y energía; trabajo digno, modelo de desarrollo y comercio justo; derechos sociales: educación, salud y alimentación; y la batalla de ideas y la construcción de hegemonía cultural.

Estas jornadas de construcción conjunta se sustentan en la unidad. Una unidad que respete e incorpore la diversidad de los pueblos, comunidades y organizaciones, y que parta del reconocimiento de las múltiples opresiones del sistema capitalista (colonialismo, racismo y patriarcado), porque solo así es posible avanzar en un proyecto sociopolítico común y emancipador.

Las actividades fueron organizadas por la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), ALBA Movimientos, la Organización Continental Latinoamericana y del Caribe de Estudiantes (OCLAE), la Universidad Estadual del Oeste de Paraná (UNIOESTE) y la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA).





**Amigos de
la Tierra
América Latina
y el Caribe**



NOAH
Friends of the Earth Denmark